



C.P. Angela Stella Duarte Gutiérrez

VJA 2025-00139

RESOLUCIÓN No. CSJTOR25-266

05 de junio de 2025

“Por la cual se resuelve una solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa”

EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DEL TOLIMA

En ejercicio de las facultades legales conferidas en el numeral 6° del artículo 101 de la ley 270 de 1996, modificado por el Artículo 85 de la Ley 2430 de 2024, y en especial las reglamentarias establecidas en el Acuerdo PSAA- 8716 de 2011 y Circular No. PSAC10-53 de 2010, y según lo aprobado en sesión ordinaria del Consejo Seccional del 05 de junio de 2025, y

CONSIDERANDO

Que el día 27 de mayo de 2025, se recibió por reparto solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa suscrita por la señora KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA en representación de sus menores hijos J.I.A.M., M.S.A.M. y S.N.A.M., asignada a este Despacho bajo el número extensión EXTCSJTOVJ25-275, por medio del cual solicita vigilancia judicial administrativa en contra del Juzgado Primero de Familia del Circuito de Ibagué.

Para control de términos se indica, que en la semana del 26 al 30 de mayo, no se llevó a cabo sala ordinaria de esta Corporación, por permiso conferido al Consejero que la integra.

HECHOS



La solicitante manifiesta una presunta mora judicial en el trámite del proceso y en el especial en trámite de la aprobación o no de la liquidación de crédito fijada en lista desde el 8 de abril de 2025, sin que a la fecha se haya realizado el control de términos, ni ha habido más pronunciamientos por parte del Despacho., dentro del proceso bajo el radicado número 73001311000120240014800.

COMPETENCIA

De conformidad con el Art. 101 numeral 6° de la Ley 270 de 1996 y Art. 1° del Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, modificada por la Ley 2430 de 2024, el Consejo Seccional de la Judicatura, es competente para adelantar Vigilancia Judicial Administrativa a funcionarios y empleados de los despachos judiciales en el ámbito de su circunscripción territorial.

PROCEDIMIENTO

Este despacho en su condición de ponente y con fundamento en la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa formulada por la señora KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA, y de conformidad con el procedimiento establecido en el Acuerdo PSAA11-8716 de octubre 6 de 2011, **AVOCÓ** conocimiento de las presentes diligencias y mediante auto CSJTOAVJ25-153 de fecha 28 de mayo de 2025, dispuso oficiar al doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, para que por escrito y dentro del término de tres (3) días diera las explicaciones del caso.

En virtud de los artículos segundo y quinto del Acuerdo PSAA11-8716 del 6 de octubre de 2011, se aplicó el procedimiento descrito para el trámite de la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa, librándose para el efecto el oficio No. CSJTOOP25-1695 del 28 de mayo de 2025, requiriéndose al doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, para que por escrito diera las explicaciones del caso con relación a los hechos y



afirmaciones contenidas en el escrito allegado por la quejosa, y los motivos por los cuales se presenta la deficiencia enunciada y si tiene justificación, advirtiéndosele que contaba para el efecto con un término improrrogable de tres (3) días para remitir la información solicitada, subsanando o normalizando la situación de deficiencia, dentro del término concedido si fuere el caso.

Por su parte el doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, mediante oficio No. 736 de fecha 03 de junio de 2025, dio contestación al oficio enviado por esta corporación, y con fundamento en los señalamientos puestos de presente dio las siguientes:

EXPLICACIONES

El funcionario judicial requerido informa, que en el Despacho Judicial cursa proceso ejecutivo de alimentos bajo radicado número 730013110001-202400148-00, promovido mediante apoderada judicial por la señora KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA en representación de los menores JESUS IVAN ARCINIEGAS MUÑOZ, MARIA SARAY ARCINIEGAS MUÑOZ y SHARIT NATALIA ARCINIEGAS MUÑOZ, y en contra del señor NESTOR IVAN ARCINIEGAS CRUZ.

Asimismo, señaló que, mediante auto de fecha 5 de marzo de 2025 se ordenó seguir adelante la ejecución en contra del demandado, ordenando practicar la liquidación del crédito y condenando en costas a la parte demandada.

Igualmente, indicó que, de acuerdo a la constancia secretarial de fecha 20 de mayo de 2025, se efectuó la fijación en lista de la liquidación presentada por la parte actora y pasa al despacho de la misma fecha; no obstante, de la verificación del expediente se encuentra en trámite el traslado de la liquidación de costas de conformidad a lo preceptuado en el artículo 446 del Código General del Proceso.



Y, por último, señaló que, el trámite del proceso se encuentra dentro del término establecido en el Art. 120 para proferir decisión de fondo respecto de la liquidación de costas y la liquidación de crédito presentada por la parte actora.

APERTURA DEL TRÁMITE DE LA VIGILANCIA

De conformidad con las explicaciones dadas por el funcionario judicial requerido y por no encontrar mérito para dar apertura a la presente Vigilancia Judicial Administrativa, se entrará a resolver de plano la solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa formulada por la señora KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA.

ANÁLISIS DEL CASO CONCRETO

Con fundamento en los hechos expuestos en el oficio de solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa, y, de conformidad con las explicaciones dadas por el doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, entrar a decidir si existe o no mérito para ejercer el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa, para lo cual deberá establecer si el funcionario judicial requerido titular del Juzgado donde cursa el proceso objeto del presente trámite, incurrió o no en actuaciones u omisiones contrarias a la oportuna y eficaz administración de justicia.

Que, con el fin de absolver el anterior interrogante, el Consejo Seccional considera pertinente estudiar **(i)** Marco Jurídico de la Vigilancia Judicial Administrativa. **(ii)** Análisis del Caso Concreto.

MARCO JURÍDICO DE LA VIGILANCIA JUDICIAL

La Vigilancia Judicial Administrativa fue establecida por la Ley 270 de 1996 y reglamentada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, mediante Acuerdo PSAA11-8716 de



2011, normas éstas que la definen como una herramienta que sirve para verificar que la justicia se administre oportuna y eficazmente, como también para procurar el normal desempeño de las labores de los funcionarios y empleados de los Despachos Judiciales.

Por otra parte, el Consejo Superior de la Judicatura mediante Circular PSAC10- 53 del 10 de Diciembre de 2010, hace algunas precisiones sobre el alcance del mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa, y señala que el mismo apunta exclusivamente a que se adelante un control de términos, en aras de velar por una administración de justicia oportuna y eficaz, sin que de manera alguna se pueda utilizar para ejercer una indebida presión sobre los funcionarios judiciales o para influir en el sentido de sus decisiones. No podrán por tanto los Consejo Seccionales – antes salas administrativas, indicar o sugerir el sentido de las decisiones, la valoración probatoria, la interpretación o aplicación de la ley, y en fin nada que restrinja su independencia en el ejercicio de la función judicial.

“En el ejercicio de esta atribución deberá adelantarse con especial respeto a la denominada independencia interna del poder judicial.....”

Que una vez estudiados los anteriores postulados y de acuerdo con la competencia atribuida al Consejo Seccional de la Judicatura en el artículo 101 numeral 6 de la Ley 270 de 1996, es claro señalar que el **ámbito y alcance** de la Vigilancia Judicial Administrativa apunta a que se adelante control y seguimiento al cabal cumplimiento de los términos procesales.

DECISIÓN

Del trámite de las presentes diligencias se tiene, que en el Despacho vigilado cursa el proceso ejecutivo de alimentos, promovido por KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA, contra NESTOR IVAN ARCINIEGAS CRUZ, bajo el radicado número 73001311000120240014800.



De los hechos narrados en el oficio de solicitud de Vigilancia Judicial Administrativa, se evidencia, que la inconformidad radica en una presunta mora judicial en el trámite del proceso y en el especial en trámite de la aprobación o no de la liquidación de crédito fijada en lista desde el 8 de abril de 2025, sin que a la fecha se haya realizado el control de términos, ni ha habido más pronunciamientos por parte del Despacho., dentro del proceso bajo el radicado número 73001311000120240014800.

Por su parte el doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, informó: **i)** que, en el Despacho Judicial cursa proceso ejecutivo de alimentos bajo radicado número 730013110001-202400148-00, promovido mediante apoderada judicial por la señora KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA en representación de los menores JESUS IVAN ARCINIEGAS MUÑOZ, MARIA SARAY ARCINIEGAS MUÑOZ y SHARIT NATALIA ARCINIEGAS MUÑOZ, y en contra del señor NÉSTOR IVÁN ARCINIEGAS CRUZ **ii)** que mediante auto de fecha 5 de marzo de 2025, se ordenó seguir adelante la ejecución en contra del demandado, ordenando practicar la liquidación del crédito y condenando en costas a la parte demandada **iii)** que, de acuerdo a la constancia secretarial de fecha 20 de mayo de 2025, se efectuó la fijación en lista de la liquidación presentada por la parte actora y pasa al despacho de la misma fecha; no obstante, de la verificación del expediente se encuentra en trámite el traslado de la liquidación de costas de conformidad a lo preceptuado en el artículo 446 del Código General del Proceso **iv)** que, el trámite del proceso se encuentra dentro del término establecido en el Art. 120 para proferir decisión de fondo respecto de la liquidación de costas y la liquidación de crédito presentada por la parte actora.

En este orden de ideas y del trámite de las presentes diligencias se advierte, que según lo informado por el funcionario judicial requerido y una vez revisado el informe resumen de la actuación procesal, se evidencia que por parte del despacho vigilado se han adelantado las actuaciones pertinentes en el marco de su competencia. Además, se advierte que el último auto librado data del 05 de marzo de 2025, donde se resolvió " **1. ORDENAR seguir adelante la presente**



ejecución en contra del demandado señor NESTOR IVAN ARCINIEGAS CRUZ, en los términos de la demanda, y conforme al mandamiento de pago ejecutivo de fecha 25 de septiembre de 2024. 2. ORDENAR practicar la liquidación del crédito en los términos indicados en el Art. 446 del Código General del proceso. 3. DISPONER que en el evento de probarse la propiedad de bienes muebles o inmuebles en cabeza del demandado, previa petición, se decretará el embargo, secuestro, avalúo y posterior remate de los mismos (Art. 440 C.G.P.), para satisfacer el pago de la obligación", como se evidencia en el siguiente vínculo:

[08AutoOrdenaSeguirEjecucion.pdf](#)

Además, en el link del expediente digital del proceso objeto de vigilancia, se advierte que mediante constancia secretarial de fecha 20 de mayo de 2025, se realizó el control de términos de fijación en lista, fecha vencimiento 11 de abril de 2025 y venció en silencio, como se evidencia en el siguiente vínculo:

[09ConstanciaSecretarial.pdf](#)

Por otra parte, y bajo el principio de autonomía e independencia judicial, el funcionario judicial requerido, ha proferido las decisiones que en derecho corresponde en el marco del procedimiento establecido y las normas aplicables al trámite de los procesos ejecutivos de alimentos.

Así las cosas, el Consejo Seccional de la Judicatura, considera que el objeto y razón de ser del mecanismo de la vigilancia judicial, es el fenómeno de la mora judicial o dilaciones injustificadas, fenómeno que en estricto sentido se echa de menos en estas diligencias, contrario sensu se advierte una debida diligencia por parte del funcionario judicial requerido al momento de adelantar los trámites correspondientes, pues a la fecha se encuentra en términos conforme al Art. 120 del Código General del Proceso para proferir la decisión que en derecho corresponde respecto de la liquidación de costas y la liquidación de crédito presentada por la parte actora.



Finalmente se pone de presente a la quejosa, que el Consejo Seccional carece de competencia para pronunciarse respecto a las decisiones judiciales dictadas al interior del proceso, esto en razón a que sus decisiones se encuentran amparadas por el principio de autonomía e independencia Judicial consagrado en el artículo 228 y 230 de la Constitución Política, pues esta vía no tiene la virtud de fungir como instancia adicional a la que puedan acudir los usuarios de la administración de la justicia, en razón a que para ello se han establecido diferentes medios de defensa ante la correspondiente jurisdicción, como son los respectivos recursos de ley o ante otras instancias judiciales, como la Comisión Seccional de Disciplina Judicial, bajo el entendido que la vigilancia judicial administrativa se encuentra instituida solo para aquellos casos en donde se observe mora judicial injustificada, situación que no se observa en estricto sentido en la presente actuación que nos ocupa; además se advierte, que el disentimiento presentado también refiere a cuestiones de derecho y de interpretación jurídica a la luz de las normas procesales, sobre las cuales no le asiste competencia a esta corporación para pronunciarse, en razón a que no es una instancia jurisdiccional sino administrativa, encargada de velar estrictamente por el cumplimiento de los términos en las actuaciones judiciales, mas no para resolver o incidir sobre las decisiones que profieren los jueces en su gestión judicial.

Por lo tanto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima, da por recibidas las explicaciones dadas por el funcionario vinculado y con fundamento en estas, procederá a no aplicar el mecanismo de Vigilancia Judicial, y una vez en firme la decisión, al archivo de las presentes diligencias.

Por último, se debe advertir a la solicitante, que la Vigilancia Judicial Administrativa es una acción eminentemente administrativa que **no otorga competencia jurisdiccional al Consejo Seccional**, es decir, la misma comprende únicamente el de ejercer control y hacer seguimiento a los



términos procesales, **más no el de modificar decisiones judiciales ni impartir órdenes a los servidores judiciales. En ningún momento abarca el de revisar el contenido de las decisiones Judiciales o controvertir las mismas y mucho menos para refutar las interpretaciones que de la ley hace el Juez en el momento de Administrar Justicia, pues de ser así, esto equivaldría a constituirse en una instancia más, que desnaturalizaría de plano la estructura de la función Jurisdiccional**, la que se funda en el respeto por la autonomía e independencia judicial, por ende la de sus órganos y servidores que ejercen la sagrada misión de administrar justicia. (Art. 230. de la C.P, y 5° de la Ley 270 de 1996).

En mérito de lo expuesto, el Consejo Seccional de la Judicatura del Tolima.

RESUELVE

ARTÍCULO 1° . - ABSTENERSE de aplicar el mecanismo de la Vigilancia Judicial Administrativa al doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, por las razones expuestas en la parte considerativa de la presente resolución.

ARTÍCULO 2° . - ENTERAR del contenido de la presente Resolución a la señora KAREN ZORAYA MUÑOZ PEDRAZA, en calidad de peticionaria y **NOTIFICAR** al doctor LUIS CARLOS PRIETO NIVIA, Juez Primero de Familia del Circuito de Ibagué, en calidad de funcionario judicial requerido. Para tal efecto líbrense las comunicaciones del caso.



ARTÍCULO 3°. – **ORDENAR** el archivo de las presentes diligencias, una vez en firme la presente decisión.

ARTICULO 4°. – Contra la presente decisión procede únicamente el recurso de reposición, a la luz de la Ley 270 de 1996 y del Artículo Octavo del Acuerdo PSAA11-8716 de 2011, por ser este trámite de única instancia, el cual deberá interponerse ante este Consejo en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a esta, y con el lleno de los requisitos establecidos en los artículos 74 y 76 del C.P.A.C.A.

Dada en Ibagué, a los Cinco (05) días del mes de junio de Dos Mil Veinticinco (2025)

NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

ÁNGELA STELLA DUARTE GUTIÉRREZ
Consejera

RAFAEL DE JESUS VARGAS TRUJILLO
Consejero

ASDG/klrc